

Guatemala: ¿Volverán los militares a sus cuarteles?*

La decisión de la social-democracia guatemalteca de regresar a la vida legal y participar en el próximo proceso electoral, ha dado nuevas fuerzas al modelo de transición y apertura propuesto por los militares, a pesar de las enormes contradicciones y del rechazo tajante de la izquierda, que sigue planteando que no hay tal apertura sino sólo una "operación maquillaje" de la dictadura militar. El máximo líder del Partido Socialista Democrático de Guatemala, Mario Solórzano, regresó del exilio y anunció la reincorporación del PSD a la vida política tras 6 años de clandestinidad. El político, abogado de 46 años, afirmó a su llegada a Guatemala que los socialistas "contribuirán al éxito del actual proceso de apertura política del país". "El PSD - añadió Solórzano se incorpora plenamente a la vida política, para lo cual iniciaremos todos los trámites que señala la actual ley de organizaciones políticas". "Vamos a hacer una oposición política constructiva - agregó - ya que sin oposición no puede haber democratización". Mario Solórzano Martínez había abandonado Guatemala hace seis años, luego del asesinato del fundador de PSD, Alberto Fuentes Mohr.

La reinserción de la socialdemocracia en la vida política guatemalteca se produce no sin grandes contradicciones y problemas. El PSD ha estado deliberando durante mucho tiempo entre las dos opciones que se le planteaban: confiar en la apertura militar y participar en ella, con la legitimidad que eso le da al proceso o, a la inversa, estrechar una alianza con los sectores izquierdistas que cuestionan la apertura, conformando un frente común al estilo de su partido congénere en El Salvador, que es integrante del FDR. La resolución por la legalización, con todos los riesgos que eso implica, se produce, además, en un momento en que no sólo los sectores de la izquierda están cuestionando la apertura militar, sino que incluso altos personajes de la derecha y del centro político.

CISMAS EN EL PSD

Pero al parecer, la fracción del PSD que lideriza Solórzano se ha visto bastante obligada a tomar la determinación que tomó. Efectivamente, en diciembre pasado, el ala de la organización liderada por Carlos Gallardo Flores, ya había tomado la determinación de reingresar al país y a la legalidad, conformando incluso una alianza con otras fuerzas centristas, con miras a la participación en las elecciones que deben realizarse en julio o agosto próximo. Solórzano, desde el exterior, desautorizó a

Gallardo Flores en un comunicado de prensa en que se expresaba que "el PSD comprende y reconoce el derecho que le asiste al Dr. Gallardo Flores y sus amigos de aspirar a conformar una entidad política, de expresar sus ideas y de formar alianzas que respondan a sus intereses, pero, no podemos aceptar que utilice el espacio político conquistado por el PSD". Ahora, con el retorno de Solórzano, no se sabe si se va a producir la reunificación o cada uno seguirá por sus aguas. De producirse la división definitiva, queda por resolverse quién se quedará con el nombre del partido y con la representatividad de miembro de la Internacional Socialista.

El sector de Gallardo Flores ha creado una alianza y ha firmado el denominado "Manifiesto de Unidad de la Izquierda Democrática", con otras seis organizaciones: Frente Unido de la Revolución (FUR); Fuerza Nueva (FN); Unidad Revolucionaria Democrática (URD); Frente Cívico Democrático (FCD); Movimiento 20 de Octubre (M-90) y Movimiento Humanista de Integración Democrática (MHID). En el manifiesto expresan que "el país se mantiene sumido en el terror y con un clima de inseguridad a causa de la actividad incontrolada de bandas de asesinos y secuestradores". Señalan que Guatemala está aislada internacionalmente debido a las continuas violaciones de los derechos humanos y que en el interior del país existen fuertes antagonismos sociales, evidenciándose una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. Al parecer, esta nueva alianza está buscando un acercamiento con la Democracia Cristiana y no se descarta que finalmente terminen apoyando a su candidato presidencial Vinicio Cerezo Arévalo. Según ha trascendido, estarían pidiendo, para dar su apoyo a Cerezo, la vicepresidencia de la república, tres ministerios y la garantía del regreso de todos los exiliados.

¿UNA FALSA APERTURA DEMOCRÁTICA?

En la izquierda, la situación y las opiniones no han variado. Las organizaciones guerrilleras agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNNG) mantienen la opinión de que los militares no van a entregar realmente el poder y que todo este proceso es parte de la política de contrainsurgencia, una necesidad de esa política y una necesidad de la burguesía debido a la concentración de contradicciones entre los diversos grupos de poder. El secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Carlos González, dijo, por ejemplo, que el proceso abierto por los militares no es más que una mera forma de redistribución del poder en interés de la contrainsurgencia y por tanto no es una real y verdadera apertura democrática". El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Pablo Monsanto, por su parte, al conmemorar el 22 aniversario de su organización, definió el proceso electoral como "una necesidad para la supervivencia

del estado actual en este país". Sin embargo, dijo que "al tener que acompañar el proceso electoral con medidas de carácter económico, se profundizan y agudizan las contradicciones internas y el ejército tiene que dar cierta apertura que conlleva riesgos políticos y militares". Monsanto afirmó que los revolucionarios están hoy en condiciones no sólo de retomar la iniciativa, sino de dar un viraje real a la lucha en Guatemala. "Nuevas y amplias perspectivas se abren para profundizar la unidad de las organizaciones integrantes de la URNG, así como para incrementar y desarrollar las acciones militares. Con nuestras acciones estamos avanzando hacia la conquista del poder, infligiendo duros golpes al ejército y obstaculizando la implementación de la maniobra electoral".

¿UNA CONSTITUCIÓN CAMUFLADA?

Mientras tanto, la elaboración de la nueva constitución de la república se acerca a su fase final. Se estima que en marzo debe estar terminado el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente en medio del generalizado desinterés y escepticismo de la población, que mayoritariamente cree que los militares van a seguir mandando realmente en el país, tras el aparato administrativo del Estado. Y como decíamos, no son sólo las organizaciones de la izquierda las que opinan así. Recientemente, el empresario Acisclo Valladares Molina, de reconocida tendencia conservadora, afirmó que "la verdadera constitución, en su parte orgánica, ha sido promulgada sin intervención de la Asamblea, o quizás, lo que es peor aún con su silencio cómplice y sumiso...". En un comentario titulado "¿A dónde va Guatemala?", publicado en el matutino Prensa Libre a fines de diciembre pasado, Valladares Molina pone el dedo en la llaga al analizar la significación del Decreto Ley 11-84, mediante el cual los militares reglamentan las denominadas coordinadoras institucionales. "Este decreto - dice el comentario es la verdadera Constitución en cuanto al funcionamiento orgánico del Estado". Agrega más adelante que "básicamente, el decreto pone en mano de las autoridades militares, a todos los niveles, lo que es la coordinación de todas las instituciones y entidades del sector público, así como las organizaciones no gubernamentales de servicio y desarrollo e incluso del sector privado que puede ser requerido de colaboración. La coordinación nacional institucional se pone bajo la presidencia del jefe del estado mayor de la defensa nacional y a nivel departamental bajo la presidencia de cada comandante de la zona militar jurisdiccional". Aunque Valladares se cuida de decir que la militarización de la coordinación institucional se hace con las mejores intenciones, no deja de advertir que el decreto "desvirtúa" los fines de la institución armada y los principios constitucionales que deben regirla: apoliticismo, obediencia, no deliberación. La verdad de las cosas es que es poco menos que imposible entender cómo, quien presida dichos or-

ganismos a todos los niveles, pueda ser obediente precisamente de las instituciones sometidas a su coordinación. Es imposible imaginar una presidencia interinstitucional que no delibere. Jamás podrá existir una coordinación interinstitucional que sea apolítica, puesto que políticas serán todas y cada una de sus decisiones, sobre todo para los fines contrainsurgentes con que son creadas.

RECHAZO A ENTES PARAMILITARES

Otro de los problemas graves que subsisten es la discusión sobre la futura legalidad de las denominadas patrullas civiles, que han creado los militares para controlar por la fuerza a la población campesina del país. El general Rodolfo Lobos Zamora, subjefe del Estado, ha sido recientemente muy explícito al señalar el interés castrense de que subsistan luego de promulgarse la nueva constitución. Los diputados de la Asamblea Constituyente, bajo presión militar, no han tenido más remedio que aprobar, bajo normas distintas, la existencia de dichas patrullas. Sin embargo, diversos sectores derechistas se oponen a ellas, especialmente por la utilización político-electoral de ellas en favor de la ultraderecha. El presidente de la Asamblea Nacional, Ramiro de León Carpio, se manifestó por la desaparición de las patrullas ya que "muchas personas han sido obligadas a formar ese cuerpo paramilitar y si alguien se resiste se le amenaza con acusarlo de comunista". Otro diputado, Roberto Alejos, expresó que esos grupos constituyen "una vergüenza nacional". Actualmente las patrullas de autodefensa civil están integradas por unos 900 mil civiles, en su mayor parte campesinos y la mayoría indígenas. El ejército ha concentrado a los patrulleros en las llamadas "aldeas modelos", las que también han sufrido duras críticas, por ser verdaderos campos de concentración.

NO HAY RETORNO A LOS CUARTELES

La situación económica se deteriora día a día. La política del actual gobierno militar ha sido someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional en todos los planos, lo que acarrea no sólo el descontento popular (con un creciente nivel de movilización) sino de diversos sectores de la burguesía. De allí que la campaña, ya iniciada, aun cuando no hay fecha para las elecciones, sea enconada y dura. La violencia, la desaparición y los asesinatos siguen a la orden del día, afectando por igual a todos los partidos que se inscriben en tendencias de centro. Así las cosas, la decisión de los socialdemócratas guatemaltecos de reinsertarse en la vida política legal no está exenta de riesgos, físicos y políticos.

La pregunta del título, ¿volverán los militares a sus cuarteles?, parece estar siendo ya respondida por su propios actores: no hay retorno, lo que hay es un nuevo intento de disfrazar constitucionalmente el poder castrense. Guatemala no está en el cono sur del continente. Está en Centroamérica.

*(Tomado de Nueva Voz , N° 26, Servicio Informativo Quincenal, Estocolmo, Suecia).

Referencias

*Anónimo, NUEVA VOZ - PRENSA. 26 - Estocolmo, Suecia;

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 76 Marzo-Abril de 1985, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.